

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
IQUIQUE

ACTA DE DELIBERACIÓN

Iquique, treinta de abril de dos mil veintiuno.

Esta Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, reunida después del debate de rigor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, clausurado el debate y de haber ponderado la prueba de acuerdo al artículo 297 del Código Procesal Penal, ha decidido, por votación unánime, condenar a **NEYSMY LIZ TOLEDO RIVEROS** y a **GILBERTO GONZALO ARREDONDO ZAMORA**, como autores del delito reiterado de estafa, previsto y sancionado en los artículos 468, en relación con el artículo 467, inciso final del Código Penal, y **ABSOLVER** a **NATALIA ROCÍO GUTIÉRREZ CARRILLO** de los cargos que por este mismo delito le dirigiera el Ministerio Público y la querellante, teniendo presente como fundamentos principales para ello, los siguientes:

La decisión de condena respecto de los enjuiciados Toledo Riveros y Arredondo Zamora se logró luego de ponderar la prueba testimonial, pericial, documental, evidencia fotográfica, de video y material incorporadas, las que demostraron los siguientes hechos:

1.- HECHO 1: COMITÉ ALTO MIRAMAR

En el mes de agosto de 2014, Neysmy Liz Toledo Riveros y Gilberto Gonzalo Arredondo Zamora, motivaron la creación del “Comité de Vivienda Alto Miramar”, de Alto Hospicio, obteniendo la personalidad jurídica N°1487-F de la Ilustre Municipalidad de esa comuna y rol único tributario en el Servicio de Impuestos Internos, procediendo a realizar diversas actuaciones encaminadas a captar una importante cantidad de miembros o socios, que se prolongó hasta fines del año 2015, con la supuesta finalidad de llevar adelante un proyecto habitacional que debía ser presentado ante el SERVIU, cuyo objetivo era construir y entregar viviendas sociales por medio de la tramitación de subsidios habitacionales por parte de la citada institución, las que se edificarían en la comuna de Alto Hospicio, donde intervendría Toledo supuestamente como encargada del proyecto y dueña del terreno donde se construirían los departamentos sociales y Arredondo como representante de la constructora que ejecutaría las obras; gestiones y actos que se realizaron por medio de la instalación de una oficina en calle Sotomayor N°575, oficina 704, del edificio Dharma, de la comuna de Iquique, que era atendida por la secretaria Natalia Gutiérrez Carrillo, y en virtud de lo cual se realizaron cobros de varias sumas de dinero por diferentes conceptos asociados al propósito del comité,

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
IQUIQUE

las que se relacionaron, principalmente, a una “cuota de inscripción” y “escrituración de estacionamiento”, dineros que, generalmente, eran recibidos por Gutiérrez y que entregaba a Toledo, ya sea en efectivo o mediante depósitos en su cuenta RUT del Banco Estado, o bien, en la cuenta que Arredondo mantenía en el Banco Santander, asignando a cada nuevo integrante un número de socio y abriendo una carpeta con una carta de bienvenida a la organización, adjuntando el detalle de los requisitos y documentos que debían reunir junto a un resumen de la normativa aplicable y un plano del conjunto habitacional que se pretendía construir confeccionados por un arquitecto contratado para tales efectos. Además, para publicitar el aparente proyecto se abrió una página en Facebook y se realizaron reuniones en sedes sociales, en la Intendencia e incluso, en la Casa del Deportista de esta ciudad, donde se explicó su alcance con la proyección de los planos y distribución de cada una de las unidades habitacionales, informando que la empresa “Inversiones Santo Domingo Limitada”, en la que era socio Gilberto Arredondo y Frank Toledo, este último hermano de Neysmy Toledo, sería la encargada de la construcción, sociedad que, si bien, estaba inscrita en los registros de constructores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, considerando el monto de su patrimonio, no podía asumir una obra de la envergadura pretendida; ejecutando todas estas acciones con pleno conocimiento que no se cumplían con los requisitos básicos para llevar a término el proyecto de viviendas sociales, puesto que no contaba con una entidad patrocinante o EGIS, que es la encargada de asesorar a los comités desde las etapas iniciales hasta la completa ejecución de esta clase de proyectos de viviendas sociales generados al alero del DS 49, siendo el SERVIU la institución que debía realizar los pagos a la EGIS y a la empresa constructora, de manera, que los cobros por los conceptos arriba indicados tenían como único objetivo que Toledo y Arredondo los aplicaran a fines propios, y que erróneamente las víctimas pagaron motivadas por el aparente ofrecimiento de la obtención de su casa que los llevó a desembolsar diversas sumas de dinero, resultando perjudicadas, entre otras: Zoila Pérez Mora, Belarmino Gutiérrez, Carolina Villalobos Quiroga, Makarena Ramos Malebrán, David Villegas Aguilar, Pablo Inostroza Castro, Víctor Ramos Malebrán, Jannina Chambe Chambe, Oscar Tapia Salvo, Disnarda Carrillo Antinao, Claudio Olivares Cifuentes, Ivannia Carrasco González, Leonardo Saavedra Cortéz, Ruth Palma Pincheira, Danisa Rodríguez Rojas, José Palma Paredes, Soledad Aguilar Manzano, Jessica Hurtado

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
IQUIQUE

Poblete y Leslie Castillo Quezada, en una suma que, a lo menos, totalizó los \$4.770.000.-

2.- HECHO 2: PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS LO ALTO HOSPICIO.

En junio del año 2014, Neysmy Liz Toledo Rivera junto a su pareja Gilberto Gonzalo Arredondo Zamora, solicitaron a Natalia Rocío Gutiérrez Carrillo, que se desempeñaba como su secretaria, que los ayudara a formar la agrupación de pequeños y medianos empresarios “Lo Alto Hospicio”, con la finalidad de arrendar un terreno de Bienes Nacionales ubicado en la ruta A 616, km 8.4, en el sector de El Boro, en la comuna de Alto Hospicio, para desarrollar un proyecto destinado supuestamente para fabricar e instalar paneles solares. Así, Natalia Gutiérrez constituyó esta agrupación, obteniendo la personalidad jurídica N°1469-F y rol único tributario ante el Servicio de Impuestos Internos, asumiendo como su presidenta, correspondiéndole firmar el contrato de arriendo del terreno con Bienes Nacionales de Tarapacá, el que fue concedido el 12 de mayo de 2015, por Resolución Exenta N°2556; iniciando, posteriormente, Toledo y Arredondo la captación de interesados ejecutando una serie de conductas tendientes a generar en éstos la falsa representación de que aquella era la propietaria del terreno y que lo que se vendía eran lotes para la construcción de galpones o viviendas, cobrando por cada uno de ellos la suma de \$6.500.000, que debían pagarse con un pie y cuotas mensuales; actividad simulante que se tradujo en acciones como el cercar el terreno con malla raschell, realizar algunos movimientos de tierra, contratar a un guardia y construir un galpón similar al que se prometía instalar en los lotes, e incluso, para aparentar la seriedad del negocio se realizó una ceremonia en el mismo terreno con la presencia del Seremi de Bienes Nacionales de la época, ocasión en que se entregó un diploma con el número de socio y el terreno asignado, unas bloquetas y un panel solar; de manera, que los afectados pagaron diversas sumas de dinero con la finalidad de adquirir un inmueble, en circunstancias que el terreno entregado en arriendo por Bienes Nacionales no podía cederse a ningún título ni subarrendarse, resultando afectados, entre otros, Ricardo Zúñiga Montecinos, Esteban Torres Almonacid, Felix Yujra Larico, Mónica Quispe Kea, Valeria Espinoza Choque, Lorena Donoso Guajardo, Alcides Huarahuara Gutiérrez, Germán Aduviri Cruz, Eleuterio Llanque Laima, Yerminson

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
IQUIQUE

García García y Gino Brañez Carlo, con un perjuicio que en total superó los \$18.250.000.

3.- HECHO 3: UN HOGAR DIGNO.

El 14 de marzo año 2012, se constituyó el Comité de Vivienda “Un Hogar Digno, obteniendo la personalidad jurídica N°1353-F de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio con la finalidad de acceder a viviendas sociales que otorga el Estado; y posteriormente, en el año 2015, la presidenta doña Nilda Vidal Quiñones, comenzó a buscar una entidad patrocinante, tal como lo exige el decreto supremo 49 del MINVU, la que debía asesorar a los integrantes del comité en cada una de las etapas requeridas hasta la completa ejecución de un proyecto habitacional, contando aquél con socios que en su gran mayoría vivían en un campamento de nombre Un Hogar Digno, tratándose de cerca de 200 familias. Así, a principios del año 2016, Neysmi Toledo se presentó en el campamento, ofreciendo al comité un supuesto proyecto de viviendas que tenía con la entidad patrocinante San Nicolás y la Constructora Santo Domingo, cuyo socio mayoritario era Gilberto Arredondo, afirmando que contaban con un terreno en el sector de La Negra de Alto Hospicio y cumplir con los demás requisitos necesarios para postular ante el SERVIU; realizando varias reuniones en el mismo campamento como en la Iglesia San Francisco de Iquique, donde se hicieron proyecciones del conjunto habitacional que se construiría, del plano de las viviendas, oportunidad en que se exhibió la maqueta de aquél, y en atención a la aparente seriedad del proyecto, la asamblea del comité decidió participar del mismo, debiendo cada familia pagar la suma de \$120.000, con la finalidad de lograr la casa propia, en circunstancias, que Neysmi Toledo, Gilberto Arredondo y la sociedad de Inversiones Santo Domingo no eran dueños de terreno alguno y tampoco contaban con la asesoría de una entidad patrocinante, por lo que no se concretaron las viviendas sociales prometidas; resultando afectados, entre otros, Katherine Alfaro Brunet, Regina Tabilo Vergara, Priscila Evaristo Villanueva y Patricia Evaristo Villanueva, resultando un perjuicio superior a los \$760.000.

4.- HECHO 4: CASO DE INGRID MUÑOZ SOTO.

En atención a la relación de confianza y amistad entre los acusados y doña Ingrid Muñoz Soto y su marido Nelson Quezada Rubina, a partir del año 2013, éstos

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
IQUIQUE

aceptaron participar como socios capitalistas en los proyectos habitacionales que les propuso Neysmy Toledo Riveros y su pareja Gilberto Arredondo Zamora, a través de la empresa constructora de éste, Inversiones Santo Domingo, toda vez que, supuestamente, mantenían muchos contactos y ofertas de proyectos; por lo que en agosto de 2014, Muñoz Soto los ayudó a formar el Comité de Vivienda Alto Miramar, para lo cual le ofrecieron obtener una vivienda social para sus hijos, por lo que aquélla le solicitó a su nuera Olga Carrasco que formara parte de la directiva de tal agrupación e igualmente, para dar mayor seriedad al proyecto, el 7 de octubre de 2014, a petición de Toledo y Arredondo, accedió a arrendar, para el funcionamiento del citado comité, la oficina en el edificio Dharma, ubicado en calle Sotomayor N°575, y posteriormente, la oficina ubicada en el edificio Montebianco, en calle Filomena Valenzuela N°395, en la Península de Cavancha, ambas de esta ciudad, en la que supuestamente operaría la empresa Santo Domingo, pero en realidad se destinó a servir como casa habitación de Frank Toledo, hermano de Neysmi, firmando Muñoz ambos contratos como arrendataria con el compromiso que la renta mensual fuera pagada por aquéllos, lo que sólo ocurrió por escasos meses, generándole diversos problemas legales.

En este mismo contexto, financió las compras de materiales para llevar a cabo las obras de reparación de la Gobernación Provincial adjudicadas a la constructora Santo Domingo, por Resolución Exenta N°777, de 17 octubre del año 2014, con el compromiso de repartir las ganancias del negocio al término de los trabajos, lo que llevó a la víctima a desembolsar importantes sumas de dinero por la compra de insumos de construcción, contrayendo deudas en Sodimac, que alcanzaron, al menos, a \$1.492.997, sin embargo, al término de la referida obra no recibió dinero alguno, percibiendo los acusados la totalidad de las utilidades, en tanto, la víctima solo contrajo deudas, varias de ellas cobradas judicialmente como consta en los autos Rol C-2794-2015, sobre término de contrato de arrendamiento y Rol C-2898-2015, sobre notificación de protesto de cheque, ambas del Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Iquique.

Asimismo, con el propósito de participar en los proyectos que desarrollarían los acusados, Ingrid Muñoz Soto aceptó ser socia, junto a Jorque Márquez Hevia y Gilberto Arredondo Zamora, de la sociedad de Inversiones “Génesis” que se

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
IQUIQUE

constituyó el 30 de octubre de 2014, sin que la citada empresa efectuara alguna operación.

De esta forma, todas las conductas descritas anteriormente, que fueron desplegadas por los acusados, tenían como único objeto simular o aparentar un negocio rentable logrando convencer a la afectada para solventar los gastos del comité de vivienda referido y la empresa constructora las que eran estructuras destinadas a dar verosimilitud a las afirmaciones mendaces de los agentes y que fueron de la entidad suficiente para producir un error en aquélla y facilitaron la disposición de carácter patrimonial y la consecuente lesión pecuniaria que alcanzó, a lo menos, a \$2.542.997.

Así las cosas, la prueba de cargo resultó de la entidad necesaria para establecer la existencia de una actividad simulante idónea destinada a aprovecharse del patrimonio ajeno, bajo la modalidad que precisa el Código Penal de valerse “de cualquier otro engaño semejante” a los que en ese estatuto se describen; ardid consistente en aparentar la existencia de bienes, capacidad, gestión, organización e infraestructura necesaria para la ejecución de viviendas sociales, por una parte, atribuirse la propiedad de inmuebles, o la existencia de negocios capaces de generar utilidades, todos cuales resultaron aparentes o fingidos, lo que con creces ha superado el ámbito de la mera mentira, generando con ello un riesgo típicamente relevante para el bien jurídico patrimonio, y por tanto, objetivamente imputable al obrar de los acusados, por cuanto, los afectados con el fin de ser parte de los referidos proyectos y por esa vía obtener la casa propia, o bien, obtener ganancias en un negocio rentable, dispusieron de los dineros que les solicitaron los enjuiciados, causándoles un perjuicio de carácter pecuniario, de forma tal que la conducta atribuida a éstos generó que las víctimas incurrieran en un error, consistente en una falsa representación de la realidad, por cuya virtud se produjo el traspaso patrimonial que menoscabó sus peculios, lo cual se tradujo en el perjuicio contra el patrimonio que el tipo penal exige, quedando acreditada también, la relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado.

La autoría inmediata y directa atribuida a los acusados Toledo y Arredondo en estos hechos se probó, más allá de toda duda razonable, con las declaraciones y reconocimientos efectuados por los testigos de cargo, quienes los sindicaron de manera categórica como los sujetos quienes aparentaron la existencia de proyectos habitacionales, se arrogaron la propiedad de inmuebles, de influencias o

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
IQUIQUE

aparentaron la posibilidad de negocios que los hicieron incurrir en un error que los llevó a disponer de parte de su patrimonio, causándoles un perjuicio significativo.

Por el contrario, se decidió la absolución de la acusada Gutiérrez Carrillo de los delitos N°1 y 2 imputados por los Acusadores, considerando que se estableció que ésta se desempeñaba como secretaria para los coacusados Toledo y Arredondo, desarrollando funciones de tal y todas aquellas encomendadas por éstos y en especial, por Neysmy Toledo Riveros, en cuanto a la captación de socios y recepción de los dineros, que, en definitiva, fueron percibidos por los primeros, sin que se acreditara la concurrencia a su respecto de ánimo de engañar a los afectados para incurrir en un error que posibilitara la disposición patrimonial, tanto así, que incluso sus propios padres resultaron perjudicados al pagar dinero por su incorporación al comité de vivienda Alto Miramar de Alto Hospicio, lo que da cuenta que Gutiérrez confiaba en la veracidad de la información entregada por Toledo y Arredondo, la que se limitó a transmitir a los interesados en pertenecer al referido comité y agrupación de pymes.

Se desestimaron las alegaciones de las defensas de los acusados Toledo y Arredondo fundado en la contundencia de la prueba de cargo, sin que las probanzas aportadas por sus defensas hayan sido de la entidad suficiente para desvirtuar aquella, de manera que tanto los delitos como la intervención de los enjuiciados atribuidos en el libelo acusatorio han quedado debidamente acreditados.

LA SENTENCIA SERÁ REDACTADA POR LA JUEZ DOÑA LORETO JARA PEÑA, FIJÁNDOSE PARA SU COMUNICACIÓN LA AUDIENCIA DEL DÍA JUEVES 13 DE MAYO PRÓXIMO, A LAS 12:50 HORAS.